

Jordi Gual
Economista
jefe de La Caixa



Doctor en Economía por
la Universidad de Berkeley.
Profesor de Economía del Ise

LUCHAR POR EL EURO

Después de tres años de grandes dificultades económicas, de muchos nervios en los mercados financieros y de convulsiones políticas que tumban gobiernos en toda la zona euro, son muchos los ciudadanos que se preguntan si hay luz al final del túnel, y si los esfuerzos que se piden a la población servirán o no de alguna cosa.

La tensión acumulada ha hecho que incluso se empiece a cuestionar el papel de la moneda única en la crisis. No es sorprendente, ya que los países intervenidos, directa o indirectamente, se ven obligados a tomar medidas de austeridad y reforma precisamente para garantizar su continuidad en la eurozona. ¿Vale la pena el es-

fuerzo?, se preguntan algunos. ¿Qué nos aporta de verdad el euro? ¿No sería más fácil si pudiéramos devaluar y, de esta manera, volver al crecimiento económico para ir reduciendo el paro?

La respuesta a estas preguntas es, en el fondo, muy sencilla. Renunciar al euro supondría para España, pero también para otros países de la periferia europea, prescindir de un instrumento clave para favorecer el progreso sostenible de nuestra sociedad. Sería un grave error.

Formar parte, de manera duradera y estable, de la unión económica y monetaria (UEM) supone, para cualquier país europeo, la renuncia a la gestión de la economía mediante impulsos macroeconómicos artificiales, ya sean de tipo

monetario, cambiario o presupuestario. Eso quiere decir que para crecer no se puede recurrir ni a la impresión de moneda, ni a su devaluación, ni al déficit público y, por lo tanto, hay que centrar los esfuerzos en la mejora de la competitividad y la productividad, únicos caminos por la creación continuada de riqueza y la generación de bienestar para la sociedad.

Que con el euro perdiéramos autonomía monetaria y cambiaria

Renunciar al euro sería un grave error porque es un instrumento clave para favorecer el progreso sostenible

era bien claro desde el principio. La pérdida de control de la política presupuestaria ha quedado patente con la crisis actual. Hay quien lamenta esta privación de soberanía. Otros pensamos que es un hecho muy positivo. Hay que tener presente que no se limita el nivel de impuestos o gastos públicos ni su composición, sino la existencia de desequilibrios sostenidos entre ingresos y gastos. Esta restricción deja un amplio margen a las políticas de los estados miembros, que libremente pueden decidir una mayor o menor presencia del sector público en la economía y el nivel de redistribución de la renta que deseen sus ciudadanos. Lo que hacen las restricciones sobre el déficit y la deuda es impedir que las decisiones

políticas de gasto no cuenten con el adecuado apoyo de ingresos. Esta no es más que una regla de administración prudente, ya que nuestro sistema político ha mostrado una tendencia inalterable a generar gasto poco productivo.

Es verdad, vivir con el euro supone prescindir de instrumentos de política económica que son muy efectivos. Pero se trata de una efectividad muy huidiza y que puede ser manipulada fácilmente por los responsables políticos. La eliminación de estas herramientas obliga al país a concentrar la atención en las políticas microeconómicas. Y este foco es positivo ya que este tipo de medidas, también conocidas como políticas de oferta, son las verdaderas fuentes estables de creación de puestos de trabajo y crecimiento de la renta per cápita.

En concreto, el euro nos obliga a reformar y modernizar toda la

legislación y las instituciones, públicas y privadas, que determinan el proceso de formación de precios y salarios en nuestra economía. Se trata de mecanismos demasiado rígidos, con mucha inercia e intervención administrativa que generan una presión inflacionaria persistente. Además, hacen el sistema productivo poco flexible, con dificultades por adaptarse a un entorno que cambia a una velocidad extraordinaria, a menudo protegiendo en exceso determinadas actividades e impidiendo el surgimiento de nuevas empresas y nuevas iniciativas.

Las exigencias en materia de déficit y deuda pública, por otra parte, suponen una bienvenida presión hacia la eficiencia de las administraciones públicas y, más en general, sobre la provisión pública de muchos servicios que son muy importantes para la sociedad, tanto por lo que suponen de

prestación directa de servicios al ciudadano (por ejemplo, la justicia y la seguridad), como en la medida en que son servicios fundamentales para el buen funcionamiento del sector económico privado (por ejemplo, la educación o las infraestructuras). El rigor en la administración de los recursos públicos, la correcta priorización de las inversiones y el gasto, y el estudio de la viabilidad económica y social de los proyectos, son garantía tanto de la sostenibilidad de las prestaciones y servicios que da el sector público, como de que el uso de los impuestos revierte de la mejor manera en la creación de riqueza del país, ofreciendo un apoyo adecuado a los sectores productivos.

Finalmente, el euro también obliga a que las políticas sectoriales, orientadas a promover objetivos estratégicos o de industrias y tecnologías específicas, no provo-

quen un despilfarro de recursos, que beneficia a determinados colectivos, perjudica la competitividad del país y acaba engrosando el déficit. En el caso de España, seguramente la política sectorial que más urgentemente necesita ser revisada es la energética, pues tiene un impacto extraordinario no solamente en la deuda pública, sino en el recurso del conjunto del país a la financiación exterior.

Por desgracia, las verdaderas obligaciones que comporta el euro no formaban parte del examen de entrada, ni han sido reformas que se hayan exigido como

Sin moneda propia, las únicas vías para crear riqueza son mejorar la competitividad y la productividad

hacia falta en los años de expansión. De hecho, estas carencias constituyen uno de los factores que ha provocado los enormes desequilibrios internos de la eurozona, que son en la raíz de la crisis actual y nos obligan a implantar una terapia de shock, con retos muy exigentes.

Pero hay que convertir la crisis y la urgencia del momento actual en una oportunidad para afianzar la voluntad colectiva del país de luchar por el euro como catalizador del cambio y las reformas que tienen que transformar nuestra sociedad en una democracia moderna, próspera y estable. Y, al mismo tiempo, hay que influir en la escena europea, con el objetivo de que una rápida reconducción de la crisis —que solamente es posible con más Europa— haga factibles y fructíferos los esfuerzos que tienen que hacer muchos de los estados miembros.